

“Que se mueran los feos”

Los defensores de derechos humanos, sindicatos, organizaciones campesinas, grupos étnicos y desplazados hacen parte del grupo de los “feos”: esos que incomodaron al presidente Uribe por criticarlo y demostrar que el Estado, muchas veces, no cumplió con sus obligaciones.

Por **Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y Martha Cecilia García***

Era lo que pretendía el doctor Shultz – personaje de la novela de Boris Vian que lleva este título-, quien se empeñó en mejorar a la humanidad hasta convertir a todos los habitantes del planeta en guapos y vigorosos individuos, y evoca las fobias públicas más acerbas del presidente Uribe que le llevaron a dividir a los colombianos entre “los buenos” (sus epígonos) y los feos que osaron criticarlo o manifestarle abierta oposición (a quienes metió en el mismo saco marcado con la etiqueta de “narcoterroristas”). Si alguien hiciera una gradación de las aversiones del presidente saliente no habría duda de que, después de ‘las far’, estarían los defensores de los derechos humanos, no sólo los miembros de ONG dedicados explícitamente a esta tarea, sino, también, todos aquellos que osaran exigir a los estamentos gubernamentales el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de un Estado social de derecho (sindicatos de trabajadores, organizaciones cívicas, campesinas, étnicas, de víctimas, periodistas, mujeres, estudiantes...).

Durante ocho años el discurso oficial insistió en la fealdad de los defensores de derechos humanos. Sujetos incómodos que pusieron en evidencia la persistencia de la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad de buena parte de la población, así como el incumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación. Tales denuncias también quedaron plasmadas en las reivindicaciones planteadas por diversos actores en las luchas sociales que protagonizaron, como se muestra en la gráfica.

El 49% del total de las protestas durante los dos periodos de Uribe Vélez exigieron el respeto a los derechos integrales y cuestionaron políticas públicas. Dos motivos de la movilización social que fastidiaron al saliente presidente al punto de acusar a quienes permanentemente siguieron el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales sobre ambos aspectos, como “politiqueros al servicio del terrorismo” que usan la “bandera



de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública y la ciudadanía le han quitado”. Y a quienes intentó negarles la voz para referirse a las políticas públicas: “Y hablan los politiqueros de derechos humanos de política social. ¡Por Dios! Ellos y los terroristas que ellos defienden han producido el desplome social de la Nación” (El Tiempo, 2003). Este discurso presidencial fue respaldado, veinte días después, por el Bloque Central Bolívar de Autodefensas Unidas de Colombia, en el comunicado “¿Por qué ladran los perros?”.

Y dos días más tarde, la entonces Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, declaró en Washington que “el Estado planea investigar el perfil y las actividades de miles de organizaciones de derechos humanos que operan en Colombia” (Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2003), idea que ya había sido lanzada en marzo de 2003 por Pedro Juan Moreno, empresario y político antioqueño que acompañó a Uribe en su primera campaña presidencial: “A las ONG también hay que hacerles inteligencia, porque son las que se han tirado este país. Hay muchas que son de izquierda. Esos son mecanismos que se inventó la subversión y los violentos para poder posicionarse” (Revista Cromos, 2003). Lo que en efecto se hizo, y de manera ilegal, como ha comenzado a quedar en evidencia en el ‘escándalo de las chuzadas del DAS’.

En febrero de 2008, el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, señaló que la manifestación



■ Movilizaciones Sociales

promovida por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para el 6 de marzo, era “convocada por las FARC” (Entrevista en Caracol Radio el 10 de febrero de 2008). Un año después, el 7 de febrero de 2009, en un consejo comunitario que se realizó en Villavicencio, el presidente arremetió contra Colombianos y Colombianas por la Paz, grupo al que denominó “bloque intelectual de las Farc [que] lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘Cuidado, Uribe es paramilitar; no le aprueben a Colombia el TLC, que Uribe es paramilitar y violador de Derechos Humanos’... A toda hora viven hablando de Derechos Humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías... no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentito de su paz y con la acusación permanente a las Fuerzas Armadas, nos paralicen la política de seguridad democrática”.

No se salvaron de la andanada de epítetos e intimidaciones los organismos internacionales de derechos humanos: “Quiero recordarle al señor (José Miguel) Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal y que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato” dijo Uribe el 1 de noviembre de 2008 en otro consejo comunitario, esta vez desde Envigado. De hecho, el 16 de junio de 2004, en un discurso Uribe se refirió al informe difundido por Amnistía Internacional en mayo de ese año: “Daremos el debate aun ante Amnistía Internacional, por poderosa que aparente ser... Recorren las oficinas europeas como ratones de biblioteca, transmitiendo chismes en voz baja, desacreditando las instituciones colombianas, pidiéndole a los gobiernos que no apoyen a Colombia que porque Colombia ‘tiene un Estado terrorista’, como lo han hecho en las últimas semanas”.



Imagen de www.noticiasve.com
José Miguel Vivanco director de América Latina para la ONG internacional Human Right Watch

El informe presentado por Human Rights Watch en enero de 2010, *“Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia”*, fue tildado por el ministro del

interior y de justicia en una entrevista en Caracol TV el 3 de febrero de 2010 como “sesgado y denota falta de información, de objetividad y de conocimiento del funcionamiento y trabajo conjunto de las instituciones del Estado colombiano” y, según el ministro de defensa, sus conclusiones “tienen una orientación política e ideológica que distorsiona la realidad y que tienen ante todo una intención deliberada de afectar la reputación de la política de seguridad democrática”.

Si el gobierno de Uribe ha estigmatizado, seguido, chuzado (‘les ha hecho inteligencia’) a los defensores de derechos humanos, los agentes de la guerra, cualquiera que sea su signo, los han amenazado de muerte y han apretado el gatillo contra ellos. El programa no

“Si el gobierno de Uribe ha estigmatizado, seguido, chuzado a los defensores de derechos humanos, los agentes de la guerra, los han amenazado de muerte y han apretado el gatillo contra ellos”.

gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos ha documentado desde 2002 hasta 2009, un total de 1.057 agresiones contra estos activistas. De ellas, 138 se cometieron en 2002, 184 en 2003, 96 en 2004, 111 en 2005, 74 en 2006, 110 en 2007, 170 en 2008, 177 en 2009. En mayo de 2010, a tres meses de finalizar el segundo gobierno Uribe Vélez, siete defensores de derechos humanos y líderes campesinos fueron asesinados, “cuatro de ellos asociados a la denuncia del desplazamiento forzado y a las reclamaciones para restitución de sus tierras”, según el Programa Somos Defensores.

Incluso, a pocos días de dejar la Casa de Nariño, el presidente Uribe arremetió nuevamente contra los defensores de derechos humanos al tildar de “terroristas” a quienes participaron en la delegación de la audiencia pública “Crisis humanitaria en los llanos Orientales” por destapar la existencia una fosa común en el cementerio de la Macarena (Caracol TV, 2010).



Imagen de <http://colombia.indymedia.org>

Durante el gobierno de Uribe el movimiento sindical también fue intimidado y tildado de terrorista. En los ocho años 557 sindicalistas fueron asesinados

Acoso al sindicalismo

Pero si las organizaciones de derechos humanos fueron intimidadas y tildadas de terroristas, el movimiento sindical no se quedó atrás. Al término de ocho años de retroceso del movimiento obrero, éste –según el presidente Uribe– es el culpable de que su mayor proyecto internacional, el TLC con Estados Unidos, no haya cuajado. La opinión pública extranjera le está cobrando el hecho de que, pese a la disminución de la violencia, en los ocho años de su gobierno hubiesen sido asesinados 557 sindicalistas –48 sólo en 2009 y 29 en lo que va corrido del presente año– (Declaración de la CSI, 99ª conferencia internacional de la OIT, 2010).

El botín cosechado por el rey de los odios durante esos ocho años –adicional a su deseo de eliminar a los “feos”– no es poca cosa: culminación de la reforma agraria narcoparamilitar que expropió y sacó de sus tierras a alrededor de cuatro millones de campesinos y comunidades negras y, de paso, arrasó con las asociaciones de productores y proyectos cooperativos independientes; ahondamiento de la desindustrialización del país, que acabó por extinguir o marchitar empresas emblemáticas que habían creado trabajo y progreso social desde su aparición en la primera mitad del siglo XX; privatización de la red hospitalaria del Sistema Nacional de Salud Pública y puesta en marcha del plan destinado a privatizar el conjunto de las empresas regionales de servicios públicos esenciales y de la principal empresa industrial del país y, finalmente, la eliminación de la jornada laboral de ocho horas y el golpe de gracia a la contratación colectiva que, en conjunto, abrieron las puertas a una mayor explotación de la fuerza de trabajo, al empleo informal y a la mayor degradación de los salarios y las condiciones de vida de los asalariados.

La reforma laboral uribista dejó a los

sindicatos sin su mayor soporte: la oferta de mejoras sociales, estabilidad del empleo y poder de negociación. La negociación colectiva cobijó apenas a 119.791 trabajadores en 2002, 72.264 en 2003 y 62.777 en 2004 (Correo de la CUT, 2005). En las empresas industriales y agroindustriales que habían logrado escapar de su desaparición por efecto de la reforma neoliberal, en los sectores de la salud, la red financiera y la seguridad privada, los sindicatos se convirtieron en “peligro a la vista” para las nuevas generaciones laborales que entraron a llenar vacantes dejadas por el despido masivo de trabajadores arrastrados por la marea de los “despidos voluntarios” que han caracterizado la nueva desocupación nacional iniciada en los años 80 y que ha elevado a Colombia al primer puesto entre las siete economías latinoamericanas más desarrolladas: 2,7 millones de desempleados en febrero de 2010, que representan una tasa de desocupación de 12,6% (El Nuevo Siglo, 2010, C3). El Dane relata el fracaso de la política de empleo en los últimos ocho años y añade que el subempleo pasó de 29,4% a 31,9% (casi nueve millones personas están hoy en el rebusque, dice). Los subempleados son casi 9 millones y los desocupados de Bogotá pasaron de 424.000 a 513.000.

“**EL Dane relata el fracaso de la política de empleo en los últimos ocho años y añade que el subempleo pasó de 29,4% a 31,9% (casi nueve millones de personas están hoy en el rebusque, dice)**”.

Aunque no hay nada que pueda satisfacer a un obseso como el señor Presidente, debe sentirse complacido porque al término de su primer larguísimo mandato (porque vendrán seguramente otros, no tanto por su probada eficacia como porque parece no querer enfrentar a la Corte Penal Internacional, que le respira cerca) los resultados son acariciadores: una tasa de sindicalización de 4,2%, una de las más bajas del continente; virtual desaparición o marchitamiento de los sindicatos de las grandes empresas fabriles y agroindustriales (con excepción del banano), del transporte de toda clase, y dispersión paralizante de los sindicatos de sector estatal (con excepción del mayor de todos, Fecode). Una forma de hacer desaparecer a los ‘feos’.

Ahora la organización y la lucha de los asalariados se concentran en el carbón, la exploración y explotación del petróleo y la

bananera y con menor persistencia en el magisterio, la banca y sectores de la salud pública. Es ilustrativo el hecho de que en los últimos ocho años las huelgas de trabajadores sumaran apenas 318, un promedio anual de 40, que representa la cuarta parte del registrado en los años 80 y 90. De todas maneras, del total de 1.431.843 huelguistas que hubo en ese lapso, 817.527 (el 57%) se movilizaron en desaprobación de las políticas económicas y sociales del gobierno uribista. Esos capaces de criticarlo y hacerle oposición que tanto le incomodaron.

La incriminación de la protesta social, un viejo instrumento de represión perfeccionado por Álvaro Uribe, cubre el escenario. La decadencia del movimiento sindical colombiano es también producto de esa situación, extraña hoy a la mayor parte de nuestros países vecinos, donde, desde hace décadas, existe un movimiento sindical organizado por ramas industriales y no por sindicatos de empresa, muy numerosos y por lo mismo muy débiles. El sindicalismo colombiano independiente persigue esa tarea desde 1964 y no ha progresado mayormente en el intento. En Argentina –como en otros países del sur del continente– la conquista comenzó en los primeros años de la segunda posguerra mundial, y eso explica que allí exista un solo contrato colectivo nacional vigilado por los sindicatos y que cubre la totalidad de los asalariados: de contrato a término indefinido y fijo, temporales, de outsourcing y de cooperativas de trabajo asociado (se ruega no regar la noticia en sitios cercanos al señor Uribe, porque es capaz de nacionalizarse argentino).

La tierra de las inequidades

Por supuesto, para el gobierno Uribe hubo otros “feos”: esos que protestaron por su legítimo derecho de acceder a la tierra, por los inconvenientes de la seguridad democrática y por la falta de atención a las víctimas. Campesinos, grupos étnicos y desplazados constituyen otro de los grupos que incomodó al presidente.

Ahora la organización y la lucha de los asalariados se concentran en el carbón, la exploración y explotación del petróleo y la agroindustria bananera.

“**Esos que protestaron por su legítimo derecho de acceder a la tierra, por los inconvenientes de la seguridad democrática y por la falta de atención a las víctimas, constituyen otro de los grupos que incomodó al presidente**”.

A pesar de que en su rendición de cuentas el Ministro de Agricultura habló de los éxitos de la política rural en cuanto a aumento de hectáreas cultivadas (de 4 millones a 5 millones), índices de reducción de desempleo rural (de 10.8 a 7.9), aprobación de 13 tratados de libre comercio y 89 protocolos sanitarios y fitosanitarios para la exportación, la verdad es que al repasar la movilización campesina, indígena, de afrocolombianos y desplazados, las cifras oficiales se desdibujan en el eterno problema de la tierra.

Invasiones y tomas de entidades por parte de desplazados, manifestaciones en contra de leyes como la de páramos o asignación de predios para cultivos de palma; movilizaciones como la del municipio El Retén (Magdalena) en julio de 2006, en la que los campesinos hicieron un mitin ante la gobernación para exigir al gobierno la entrega de más de 1000 hectáreas de tierras de las que se apoderaron narcotraficantes que, para colmo, cuando los campesinos pensaron que iban a recibirlas, estas fueron asignadas por el presidente a desmovilizados (El Heraldo, 2006); y acciones como la de 300 desplazados de diferentes partes del país que cansados de trámites legales para exigir la tierra prometida invadieron la finca La Camila en el corregimiento Guadalejo, del municipio de San Pedro, para hacer valer sus derechos por vías de hecho y llamar la atención sobre su difícil situación socioeconómica (El Tiempo, 2008). Son situaciones que resaltan este problema de larga duración, acentuado durante el gobierno Uribe¹ y llevado a niveles de escándalo por el Agro Ingreso Seguro, los paraempresarios y



■ Movilizaciones Sociales

y la deslegitimación de las movilizaciones de campesinos.

Otro de los graves problemas es que muchas de las tierras entregadas son improductivas, mientras se mantiene la concentración de la propiedad: así, por ejemplo, el 18 de octubre de 2005, indígenas se tomaron la finca Fátima en Puracé, Cauca. La respuesta del gobernador del departamento, Mosquera Chauz, daba la idea de que los indígenas ya poseen grandes extensiones de tierra, que mantienen improductivas, a lo que respondió la Onic que gran parte de esas tierras se encuentran en zonas no fértiles y que las tierras fértiles pertenecen a los grandes latifundistas que las dedicaron a hatos de ganado (El País, 2005).

Así el panorama, las cifras de las que habla el Ministerio de Agricultura se quedan en el 35 y 40% de cumplimiento de lo presupuestado. No es extraño entonces que muchas de las movilizaciones sean motivadas por el incumplimiento de acuerdos previos que, además de las dificultades con las tierras, respondieron también durante la era Uribe a los problemas de infraestructura vial.

“No es extraño que muchas de las movilizaciones sean motivadas por el incumplimiento de acuerdos previos que, además de las dificultades con las tierras, respondieron también durante la era Uribe, a los problemas de infraestructura vial”.

La movilización en contra de las fumigaciones y a favor de la erradicación, encontró un motivo constante por la afectación que cultivos como los de pancoger sufren con esta práctica de la política antidrogas. Movilizaciones en Tarazá y Valdivia en enero de 2009 son algunas de las más evidentes al respecto.

A estas demandas se suman las protestas contra la violación de derechos fundamentales: en algunos casos ya conocidos, indígenas y afrocolombianos protestaron contra los grupos armados, rechazaron el asesinato de sus líderes y el desalojo de sus tierras. En las mingas los indígenas insistieron en exigir el reconocimiento de sus territorios y el respeto a su cultura, mientras los afrocolombianos, en sus constantes protestas contra el concurso docente, pusieron en evidencia que éste hace parte de una serie de reformas a la legislación educativa que no reconoce las particularidades culturales y descalifica los saberes afro e indígenas. Los desplazados reiteradamente expresaron en espacios públicos sus



En el departamento del Tolima se han realizado varias marchas en contra de la seguridad democrática.

frustraciones por el incumplimiento de los compromisos del estado con ellos.

La marcha de junio del 2006 desarrollada en el Tolima contra la seguridad democrática (Voz, 2006) señala un punto de importancia en la protesta campesina contra políticas y planes estatales, que también se evidenció en las movilizaciones contra los bloqueos de alimentos causados por el ejército nacional y contra el programa de reclutamiento de campesinos para apoyar la fuerza pública (El Herald, 2002). Campesinos del Meta se concentraron durante cuatro días en Puerto Toledo y Florencia en septiembre de 2005, para protestar contra el Plan Patriota, las detenciones y malos tratos por parte de las FFAA, para denunciar los crímenes paramilitares y reclamar la presencia del gobierno nacional y departamental, las Naciones Unidas y ONG. Un mes antes en Bogotá se había realizado un foro con la presencia de campesinos de las regiones afectadas por el Plan Patriota en el cual se presentaron denuncias de atropellos y arbitrariedades de la Fuerza Pública (Voz, 2005). Otro tema que convocó la movilización de pobladores rurales fue la firma de tratados de libre comercio, en particular, el acordado con la Unión europea en mayo de 2010, fue recibido con protestas de lecheros.

Es necesario resaltar que siendo muchas de estas manifestaciones expresiones contra el conflicto, los señalamientos del gobierno a que las protestas respondieron a presiones de los grupos armados o a infiltraciones de los mismos representaron una deslegitimación de los procesos de movilización y marcaron de manera más contundente la distancia con el gobierno y las facultades para resolver estos problemas sociales. Otra manera de estigmatizar a los feos.

Así las cosas, un repaso por la movilización social durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez nos dice que entre los legados que nos dejan las antipatías gubernamentales está un constante rechazo a los “feos”, esos que son diferentes y que critican o rechazan la política gubernamental. Y que fueron incómodos para el gobierno porque en medio de sus reclamos no sólo demostraron que el Estado, en muchos casos, dejó de cumplir sus obligaciones sino que la equidad no fue

precisamente la proclama fundamental del gobierno Uribe. ■

Notas

¹ Un informe publicado en el diario El Tiempo, a un mes del fin de gobierno, asegura que lo que resta de presupuesto para la compra de tierras este año, es igual al costo de un Black Hawk. (El Tiempo, 2010, pp. 1-2).

Referencias

- Caracol Radio, 2008, “El gobierno descalifica la marcha del 6 de marzo”, 10 de febrero. Disponible en: <http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=546604>
- Caracol TV, 2010, “Enérgico rechazo del Gobierno Uribe a informe de la Human Rights Watch”, 3 de febrero. Disponible en: <http://www.caracol.com/noticias/nacion/articulo167112-energico-rechazo-del-gobierno-uribe-a-informe-de-la-human-rights-watch>
- Correo de la CUT, 2005, informe a la 37ª junta directiva nacional, 8 de abril.
- Correo de la CUT, 2010, Declaración de la CSI, 99ª conferencia internacional de la OIT, junio.
- El Espectador.com, 2009, “No vamos a permitir que el ‘bloque intelectual de las Farc’ nos desoriente”, 7 de febrero. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo115889-no-vamos-permitir-el-bloque-intelectual-de-farc-nos-desoriente>
- El Espectador.com, 2008, “Uribe arremetió contra director de Human Rights Watch”, 11 de noviembre. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo87407-uribe-arremetio-contra-director-de-human-rights-watch>
- El Herald, 2006, 25 de julio.
- El Herald, 2002, 31 de agosto.
- El Nuevo Siglo, 2010, cifras del DANE, Bogotá, 1 de abril, C3.
- El País, 2005, 19 de octubre.
- El Tiempo, 2003, “Fuerte réplica de Uribe a ONG”, Bogotá, 9 de septiembre.
- El Tiempo, 2008, 3 de enero.
- El Tiempo, 2010, “Tierras: presupuesto de este año es igual al costo de un Black Hawk”, julio 2, pp. 1-2.
- Human Rights Watch, 2010, Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, enero de 2010. Disponible en: <http://www.hrw.org/en/reports/2010/02/03/herederos-de-los-paramilitares>
- Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2003, “Los paramilitares respaldan el discurso del Presidente Álvaro Uribe Vélez contra las ONG”, Ginebra, 2 de octubre.
- Programa Somos Defensores, 2010, “Mayo-de la alerta a la crisis: siete líderes ‘asesinados’ y 110 organizaciones de derechos humanos amenazadas”, 11 de junio. Programa somos defensores, 2010, “Mayo-de la alerta a la crisis: siete líderes ‘asesinados’ y 110 organizaciones de derechos humanos amenazadas”, 11 de junio.
- Revista Cromos, 30 de marzo de 2003.
- Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDDH), Informe 2009, Programa somos defensores, Informe 2009.
- Voz, 2006, 21 de junio.

***Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y Martha Cecilia García**
Investigadores, Movimientos Sociales
CINEP/ Programa por la Paz